de servicios ascienden a \$28.731 millones que corresponden al 53% de los ingresos del hospital que comparados con los gastos y costos de operación que ascienden a \$35.526 millones, genera un déficit de la operación por valor de \$6.795 millones, valor estimado ya que se presentan dificultades en la causación de las cuentas ya que no son radicadas a tiempo por parte de los proveedores de bienes y servicios.

(...)

3.4. COMPONENTE JURÍDICO

El Hospital a 30 de noviembre reporta 25 procesos en contra con unas pretensiones por valor de \$20.004 millones. De los cuales el 72% son de reparación directa, el 20% ejecutivo contractual y el 8% nulidad y restablecimiento del derecho”.

Que la Superintendente Delegada para Prestadores de Servicios de Salud de la Superintendencia Nacional de Salud mediante concepto de fecha 23 de enero de 2023, llevó a cabo análisis de la situación de la Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Francisco de Asís, en cada uno de sus componentes; administrativo, financiero, técnico científico y jurídico concluyendo lo siguiente:

Técnico científico

- Se solicita a la ESE dar continuidad a las órdenes que se encuentran en un cumplimiento de ejecución parcial.
- Se debe articular con las EAPB y la Entidad Territorial el seguimiento de las gestantes que ingresan al servicio de urgencias con alto riesgo obstétrico con el fin de garantizar que se lleve a cabo la gestión del riesgo, lo anterior, debe estar documentado.
- Es importante que la ESE mejore el registro de las unidades de análisis para la identificación de los factores asociados a las muertes maternas.
- Las actividades que se están ejecutando en el plan de aceleración para la reducción de la mortalidad materno perinatal deben ser registradas en el indicador respectivo de forma mensual.
- En el indicador de medicina especializada no se evidencia la justificación de aquellas que no presentan registros de consulta.
- El indicador de eventos adversos muestra debilidades en la clasificación, por lo anterior, es necesario que sea más consistente el análisis y la revisión del mismo.

Financieras y administrativas

- Con la viabilidad, financiación y ejecución de los proyectos de Imagenología y la Unidad Mental se espera mejorar los niveles de producción.
- La entidad se encuentra reconociendo y registrando información sobre las transacciones económicas en el Software destinado para tal fin, teniendo en cuenta que al inicio de la intervención el manejo de la información era manual.
- Se han venido identificando las falencias por cada una de las áreas del hospital en pro de generar acciones que permitan su subsanación y mejora continua bien sea por medio de una Medida Especial o a través de la competencia propia de la Entidad Territorial, en pro de la determinación definitiva de cifras que conlleven a revelar la situación financiera real de la entidad.
- Continúan las incongruencias en la información emitida, lo cual resta confiabilidad a las cifras relacionadas en cada uno de los reportes generados por la entidad.
- Se retoman actividades para la actualización de Procesos y procedimientos para cada una de las áreas del hospital y se retoma la conciliación entre ellas.
- Pese a las acciones emprendidas continúan las dificultades en el proceso de facturación, radicación y recaudo en aras de generar un adecuado flujo de recursos que permita el pago oportuno de sus obligaciones en el corto, mediano y largo plazo.
- La falta de liquidez conlleva de forma recurrente a la acumulación de las obligaciones derivadas de la operación corriente.
- Por medio de la gestión realizada desde esta Superintendencia se logró la asignación de recursos para apalancar la operación corriente de la Nueva ESE por valor total de \$25.443 millones.
- La Nueva ESE continúa requiriendo de recursos adicionales para apalancar su operación corriente, lo cual no le permite garantizar su autosostenibilidad.
- Persiste el déficit operacional.

Jurídicas

- En cuanto al componente jurídico, la ESE durante la medida de intervención a través de solicitudes al Banco Agrario, ha logrado identificar la información de títulos judiciales y muestra conforme a la base de datos remitida por el Banco Agrario que a la fecha no tiene títulos pendientes por recuperar.
- Si bien la ESE ha mostrado cumplimiento frente a los requerimientos o actuaciones dentro de los procesos judiciales en que es parte, ello no indica que la defensa judicial de la entidad sea adecuada, por cuanto en temas básicos como las cifras de las pretensiones en cada una de las demandas no existe confiabilidad de los datos.
- La información del formato IPS18-1 que contiene la totalidad de los procesos jurídicos certificados por la ESE, presenta incoherencias frente a las pretensiones y las contingencias judiciales, por cuanto si bien algunos procesos jurídicos están calificados en riesgo bajo de condena, incluyen en las contingencias el valor pleno de las pretensiones como si se tratara de un proceso con riesgo alto de condena.
- Si bien la Entidad cuenta con una política de prevención del daño antijurídico no se tiene claridad sobre la forma como se mide el riesgo de condena en los procesos

jurídicos - No se tiene claridad sobre la forma como la ESE lleva a cabo la clasificación del riesgo en los procesos jurídicos y la denominación del riesgo que está efectuando la entidad resulta confusa; e igualmente carece de una política de defensa judicial que le permita a la ESE prevenir el daño antijurídico”;

Que la Superintendente Delegada para Prestadores de Servicios de Salud y la Directora de Medidas Especiales para Prestadores de Servicios de Salud, el 24 de enero de 2023, frente al vencimiento de la medida de intervención, señalaron que aunque una de las principales razones para esta, era la ejecución de los \$18.900 millones asignados por el Gobierno nacional lo cual se cumplió a satisfacción; se requiere culminar algunas actividades relacionadas con procesos y procedimientos, depuración contable, procesos de facturación, defensa judicial, gestión contractual, entre otros, con el fin de reforzar el trabajo que se viene realizando en la ESE;

Que el Comité de Medidas Especiales en sesión del 26 de enero de 2023, luego de realizada la presentación sobre la situación de la Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Francisco de Asís, le recomendó al Superintendente Nacional de Salud tramitar ante el Ministerio de Salud y Protección Social, la prórroga ejecutiva de la medida de intervención forzosa administrativa de que es objeto la citada ESE, quien, mediante comunicación radicada bajo el número 202342300311052 de 10 de febrero de 2023, puso a consideración del Gobierno nacional la prórroga de la medida;

Que la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de Salud y Protección Social emitió concepto técnico mediante memorando radicado con el número 202323120054183 del 14 de febrero de 2023 y con fundamento en la información suministrada por la Superintendencia Nacional de Salud recomendó que se prorrogara la “intervención forzosa administrativa para administrar de la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís por el término de Seis (6) meses a partir del 1° de marzo de 2023”;

Que conforme con lo expuesto, el Gobierno nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 del Decreto ley 663 de 1993, modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999 y el inciso 3° del numeral 2 del artículo 9.1.2.1.1 del Decreto número 2555 de 2010, autoriza la prórroga de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar de la Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó departamento de Chocó, por el término de seis (6) meses, con el fin de darle continuidad a las acciones propuestas en el Plan de Acción, así como lograr la estabilidad financiera y administrativa de la ESE y una adecuada prestación del servicio de salud para los usuarios;

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar la prórroga del término de la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar de la Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó departamento de Chocó identificada con el NIT 901.108.114-5 de conformidad con la parte motiva de la presente resolución.

Parágrafo. La prórroga será por el término de seis (6) meses, es decir del 1° de marzo al 31 de agosto de 2023. La Superintendencia Nacional de Salud, podrá disponer el levantamiento de la medida de intervención antes del vencimiento de la presente prórroga.

Artículo 2°. Comunicar la presente resolución a la señora Inés Bernarda Loaiza Guerra, identificada con cédula de ciudadanía número 43005051, en calidad de agente especial interventora de la Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó-Chocó, al Gobernador del departamento de Chocó y al Superintendente Nacional de Salud.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 27 de febrero de 2023.

GUSTAVO PETRO URREGO

La Ministra de Salud y Protección Social,

Diana Carolina Corcho Mejía.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DECRETOS

DECRETOS NÚMERO 0263 DE 2023

(febrero 27)

por el cual se prorroga el plazo de liquidación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Liquidación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los numerales 14 y 15 del artículo 189 de la Constitución Política, en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, el artículo 15 del Decreto 1776 de 2022, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 1776 del 28 de agosto de 2022, se dispuso la supresión y liquidación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No

Repetición en Liquidación, puesta en marcha mediante Decreto ley 588 de 2017 como un ente autónomo e independiente del orden nacional de rango constitucional, con personería jurídica, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, sujeto a un régimen legal propio, por un período de tres (3) años de duración.

Que de acuerdo con la Ley 1105 en su artículo segundo el cual modifica el parágrafo 1° del artículo 2° del Decreto ley 254 de 2000 el cual señala que, en el acto que ordena la supresión o disolución se señalará el plazo para realizar la liquidación de la respectiva entidad, el cual será fijado teniendo en cuenta las características de la misma. Si la liquidación no concluye en dicho plazo, el Gobierno podrá prorrogar el plazo fijado por acto administrativo debidamente motivado.

Que el artículo 15 del Decreto 1776 de 2022 establece el plazo para adelantar el proceso de la liquidación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Liquidación será de seis (6) meses, contados a partir de la entrada en vigencia del decreto. Vencido el término de liquidación aquí señalado, terminará para todos los efectos la existencia jurídica de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en liquidación. El Gobierno nacional podrá prorrogar el plazo fijado mediante decreto debidamente motivado.

Que mediante comunicación del 17 de enero de 2023 el liquidador de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Liquidación expuso los motivos jurídicos y técnicos por los cuales se requiere la prórroga de seis (6) meses mencionando entre otros; el cierre de las siguientes actividades determinadas por el Decreto 1776 de 2022 y el 254 de 2000; i) Intervención en los archivos de la entidad suprimida y Fondo Documental de acuerdo con el (artículo 11 y 12 del Decreto 1776 de 2022), ii) Archivo del proceso liquidatorio de la Comisión de la Verdad en Liquidación (artículos 4° y 11 del Decreto 1776 de 2022), iii) Inventario físico, jurídico y contable detallado de activos y pasivos (artículo 7° Decreto 1776 de 2022), iv) Cierre financiero y Acta de Liquidación (artículos 35, 36, 37 y 38 del Decreto 254 de 2000), v) Continuar y concluir las operaciones pendientes al tiempo de la liquidación (artículo 3° Decreto 1776 de 2022), vi) Realizar y entregar el inventario de procesos judiciales y reclamaciones (artículo 10 Decreto 1776 de 2022).

Que mediante radicado 20232060074442 del 1° de febrero de 2023 el liquidador de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Liquidación dio alcance a la anterior comunicación mediante la cual solicitó prorrogar el término para concluir la liquidación, con el fin principal de evitar riesgos que impedirían que las víctimas y la sociedad no accedan a la verdad histórica, la memoria y la reparación como pilares del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera de 2016.

Que en las mencionadas comunicaciones se presenta un informe pormenorizado del avance de las actividades en el marco de la Liquidación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Liquidación, el cual coincide con los presentados al Gobierno nacional y denotan un avance importante de las actividades realizadas, los que en algunos casos demuestran un avance de más del 70%, por lo tanto, de acuerdo con la información entregada y el plazo otorgado inicialmente de seis (6) meses, se considera que con una prórroga de tres (3) meses es suficiente para terminar el mencionado proceso de liquidación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Liquidación.

Que se hace necesario prorrogar por tres (3) meses la liquidación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Liquidación para que adelante todas las actividades necesarias tendientes a la liquidación de la entidad en los términos y condiciones contenidos en el régimen legal establecido en el Decreto 254 de 2000 y la Ley 1105 de 2006.

Que de acuerdo con la comunicación del Liquidador “La trascendencia de la misión que me fue confiada por el señor Presidente de la República para liquidar la Comisión de la Verdad está en culminar debidamente las medidas técnicas, documentales, jurídicas y tecnológicas que requiere un archivo de derechos humanos de las dimensiones mencionadas en el tiempo solicitado; para posteriormente transferirlo al Archivo General de la Nación bajo la titularidad y supervisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, de acuerdo con los términos que estableció la extinta Comisión de la Verdad”.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Prorrogar el plazo dispuesto para adelantar el proceso de liquidación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Liquidación, establecido en el artículo 15 del Decreto 1776 de 2022, por tres (3) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.

Parágrafo. En el evento que los procesos que sustentan la prórroga establecida en el artículo 1° de este decreto, puedan concluirse antes del término señalado, el Liquidador procederá al cierre inmediato de la liquidación.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 27 de febrero de 2023.

GUSTAVO PETRO URREGO.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Antonio Ocampo Gaviria.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

César Augusto Manrique Soacha.

SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia Nacional de Salud

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 2023900000001329-6 DE 2023

(febrero 24)

por la cual se actualiza el procedimiento para las devoluciones de sumas de dinero consignadas en exceso o que no correspondan a la Superintendencia Nacional de Salud.

El Secretario General de la Superintendencia Nacional de Salud, en uso de sus facultades legales, y reglamentarias, en particular la conferida en el numeral 4 del artículo 1° de la Resolución 20218000013040-6 de 2021 y la Resolución 2022910010008185-6 de 2022.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 233 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 1° del Decreto 1080 de 2021, señalan que la Superintendencia Nacional de Salud es un organismo adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del poder público en el orden nacional.

Que el artículo 5° de la Ley 1066 de 2016 estableció que “Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.”

Que en el artículo 130 de la Ley 1438 de 2011, modificado por el artículo 3° de la Ley número 1949 de 2019, fueron definidas las infracciones administrativas que podrán ser sancionadas por la Superintendencia Nacional de Salud, previo agotamiento del debido proceso administrativo.

Que el artículo 98 de la Ley 488 de 1998, modificado por el artículo 76 de la Ley número 1955 de 2019, señala que la Superintendencia Nacional de Salud se encuentra facultada para efectuar el cobro, a las personas jurídicas de derecho privado y público sometidas a su inspección, vigilancia y control, de una contribución de vigilancia a su favor cuyo fin es apoyar el cubrimiento de los costos y gastos que ocasione el funcionamiento e inversión de la entidad.

Que el numeral 56 del artículo 4° del Decreto 1080 de 2021 consagra, como una de las funciones de la Superintendencia, “Calcular, liquidar, recaudar y administrar los tributos a favor de la Superintendencia Nacional de Salud, que corresponda sufragar a las entidades sometidas a su inspección, vigilancia y control, de acuerdo con la normativa vigente”.

Que conforme lo establecido en el artículo 39 del Decreto número 1080 de 2021, entre las funciones de la Dirección Financiera, se encuentra a cargo, entre otras, las siguientes funciones:

“1. Dirigir y ejecutar las actividades de presupuesto, contabilidad, tesorería, tributos a favor de la Superintendencia, cobro persuasivo y coactivo, recaudo de los ingresos y, tesorería que requiera la operación de la Superintendencia Nacional de Salud.

(...)

12. Administrar los estados de cuenta de las personas naturales o jurídicas, con el fin de validar la veracidad de la información allí consignada.

(...)

“17. Dirigir, controlar y realizar seguimiento a los procesos para recaudar y cobrar la contribución por vigilancia, sanciones y multas a favor de la Superintendencia Nacional de Salud.”

Que el artículo 861 del Decreto 624 de 1989 - Estatuto Tributario contempla la compensación de valores previa a la devolución de saldos en los siguientes términos: “(...) en todos los casos, la devolución de saldos a favor se efectuará una vez compensadas las deudas y obligaciones de plazo vencido del contribuyente o responsable. En el mismo acto que ordene la devolución, se compensarán las deudas y obligaciones a cargo del contribuyente o responsable”.

Que la Superintendencia Nacional de Salud emitió la Resolución número 00845 de 2015, modificada por la Resolución 005071 de 2017, en la que se reglamentó el procedimiento para la devolución de recursos por concepto de mayores valores pagados y el pago de lo no debido, en consideración a que los terceros realizan pagos que requieren ser devueltos o compensados, en concordancia con lo previsto en el artículo 2313 del Código Civil.

Que mediante Resolución número 20218000013040-6 de 2021 el Superintendente Nacional de Salud delegó en el empleo de secretario general de la Superintendencia